

Políticas sociales como límite y como herramienta: Reflexiones a partir de experiencias de gestión de dirigentes y referentes piqueteros/as en el período 2001-2007.

Cecilia Cross* y Ada Freytes Frey**

Artículo Publicado en “ Revista El Príncipe, N° 1, Año 2009, pp 75-98; ISSN 0328-2589.

Resumen:

En el estudio de las políticas sociales encontramos dos grandes enfoques. Por un lado, aquellos enfoques macro que analizan los procesos de diseño e implementación de programas sociales desde el punto de vista de su diseño a nivel nacional. Por otro, los que estudian las prácticas locales de gestión de recursos, quienes subrayan la necesidad de aprehender los vínculos sociales que se construyen en torno a la implementación de políticas sociales desde análisis microsociológicos

A partir de una investigación cualitativa llevada a cabo en los últimos 7 años con diversas organizaciones radicadas en el conurbano bonaerense, en este artículo nos proponemos presentar un enfoque desde el cual los aspectos institucionales de las políticas sociales y las relaciones establecidas en el ámbito territorial en torno a su implementación puedan recuperarse articuladamente.

En este trabajo mostraremos cómo las políticas sociales se han constituido a la vez en marco de referencia para el establecimiento de prácticas organizativas y en sustrato de disputa en torno a la definición de la cuestión social. En este sentido, enfocaremos este análisis considerando que la política social constituye una cristalización provisoria de las relaciones de fuerza en el campo político.

Palabras clave: política social, prácticas organizativas, movimientos piqueteros, economía social, conurbano bonaerense.

Abstract:

We found two major approaches in the study of social policies. On one hand, macro approaches that analyze design and implementation of social programs considering its formulation at national government level. On the other, those which by adopting micro sociological approaches focus on social ties building. Our research shows that both approaches should be integrated to give account of complexities around social policies implementation.

In this paper will show that these mentioned policies have constituted, simultaneously , in reference for establishment of organisational practices and substrate of dispute over the definition of social question. In this sense, we consider social policy as a temporary crystallization of power relations in the political arena.

The results we present on this paper are based on a qualitative research conducted in the last seven years, in which we worked with different territorially –based organisations located on Buenos Aires surroundings.

*Doctora en Ciencias Sociales (UBA), Investigadora CONICET con sede en Ceil – Piette; ccross@ceil-piette.gov.ar

** Socióloga (USAL), Doctoranda UBA, Becaria NCCR-NS, afrentes@sion.com.

Keywords: social policy, organizational practices, movements piqueteros, social economy, Buenos Aires.

Introducción.

En el estudio de las políticas sociales encontramos dos grandes enfoques. Por un lado, los que analizan procesos de diseño e implementación de programas sociales desde el punto de vista de las definiciones de los organismos financiadores, usualmente Banco Mundial, y de los gobiernos nacionales. Para estos enfoques, “la política social no es otra cosa que la forma política (es decir, “estatalizada”) de la cuestión social” (Grassi, 2004: 273). Por otro, quienes estudian las prácticas locales de gestión de recursos estatales quienes subrayan la necesidad de aprehender los vínculos sociales que se construyen en torno a la implementación de políticas sociales desde análisis microsociológicos (Auyero, 2000)

Consideramos que esta oposición entre macro-institucional y micro-sociológico no permite percibir las complejidades que involucran estos procesos. Con el fin de aportar a esta cuestión, en este artículo nos proponemos presentar un enfoque desde el cual los aspectos institucionales de las políticas sociales y las relaciones establecidas en el ámbito territorial en torno a su implementación puedan recuperarse articuladamente.

Para ello, en este trabajo analizamos las experiencias de gestión de políticas sociales de dirigentes y referentes piqueteros/as en el período 2001-2007, mostrando cómo las políticas sociales se han constituido a la vez en marco de referencia para el establecimiento de prácticas organizativas y en sustrato de “lucha” en torno a la definición de la cuestión social. En este sentido, enfocaremos este análisis considerando que la política social constituye una cristalización provisoria de las relaciones de fuerza en el campo político.

Este artículo está basado en resultados de investigaciones apoyada por el National Centre for Competence in Research North – South (NCCR-NS) con sede en Berna, Suiza y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Dicha investigación estuvo orientada a analizar las prácticas de organización y las estrategias de construcción de ciudadanía de los movimientos de desocupados/as, poniendo especial atención es sus formas de relacionamiento con la política pública.

Para ello se llevó a cabo un estudio de casos que abarcó cinco movimientos de trabajadores/as desocupados/as, seleccionadas en función de sus diferentes trayectorias y construcciones políticas: la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat de la Central de los Trabajadores Argentinos (FTV), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimientos de Trabajadores Desocupados de Florencio Varela (MTD-Línea Varela), el Frente Popular Darío Santillán (FPDS) y el Polo Obrero (PO).

Si bien hemos encontrado diversas prácticas organizativas en cada uno, dos figuras se encontraron en los cinco movimientos estudiados. Por un lado, los/as “dirigentes”¹, encargados/as de definir los posicionamientos estratégicos en el campo político a escala nacional. Por el otro lado, los/as “referentes barriales”, responsables de la gestión de programas sociales. En nuestra investigación hemos entrevistado a

¹ En algunos casos reciben el nombre de “responsables políticos/as”, en otros “voceros/as”, pero preferimos utilizar una categoría única en la medida en que la similitud de sus roles así lo permite

dirigentes y referentes de cada uno de los movimientos referidos anteriormente, totalizando 45 entrevistas en profundidad. Esta técnica de recolección fue complementada con la observación de actividades, asambleas, plenarios, reuniones de trabajo de diversas áreas y movilizaciones (cortes de ruta, acampes, marchas). Además se relevaron documentos y páginas web de las organizaciones.

Por otra parte, hemos efectuado entrevistas a funcionarios/as nacionales de los Ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) y Desarrollo Social (MDS), y realizamos un trabajo de revisión de las políticas sociales vigentes en el período analizado, así como de declaraciones públicas y entrevistas publicadas en las páginas web de los ministerios y/o en diarios de amplia circulación como La Nación, Clarín y Página/12.

Hemos analizado esta variada información siguiendo el método de comparación constante para la generación de teoría fundada en los datos desarrollado por Barney Glaser y Anselm Strauss (1967).

Del análisis de estos datos, en relación con el estudio de las experiencias de gestión de las políticas sociales relevadas, surgen dos etapas diferenciadas a partir de los cambios en materia de política social comenzados en mayo de 2003². Este artículo, entonces, se estructura en tres partes: en la primera de ellas, analizamos el período 2001-2003, en la siguiente los desafíos que impusieron a las organizaciones los cambios de la política social desde el inicio de la gestión kirchnerista para pasar, en el tercer y último apartado, a la presentación de nuestras reflexiones finales.

1. La construcción política en torno a los “planes sociales”: de “beneficiarios/as” a “piqueteros/as”: 2001-2003

Distintos estudios muestran que el proceso de crecimiento, consolidación y progresiva visibilidad pública de los movimientos de trabajadores/as desocupados/as que se produjo desde mediados de los '90, estuvo ligado a la expansión de los programas de subsidio al desempleo, destinados fundamentalmente a los/as desocupados/as pobres (Svampa y Pereyra, 2003; Manzano, 2003; Quirós, 2006).

Dichos programas formaron parte de un esquema de política focalizada, en el marco de las recomendaciones y aportes financieros de los organismos de crédito internacional, orientada a paliar “los efectos colaterales” del ajuste neoliberal. En este marco tuvo lugar lo que fue calificado como un desplazamiento de las políticas universalistas del *welfare* a la focalización propia del *workfare* (Barbier, 1996). Estas políticas, que brindan asistencia a cambio de una contraprestación laboral, se instalaron en la dialéctica tradicional de asistencia-represión a los sectores empobrecidos de la sociedad.

En nuestro país el ejemplo paradigmático ha sido el “Programa Trabajar”, en sus tres versiones, el cual fue financiado con préstamos del Banco Mundial. Este programa adjudicaba una ayuda económica no remunerativa para trabajadores/as desocupados/as, a cambio de una contraprestación ligada a la realización de obras públicas en municipios y/u organismos públicos.

² La distinción en etapas es enteramente analítica. Los cambios en la política social que señalamos no se manifestaron en forma automática con el cambio de gobierno, como veremos más adelante. De hecho, al fin de la gestión de Néstor Kirchner (2003-2007) los “traspasos” de los beneficiarios del Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados no había sido completada. Sin embargo, otras medidas –como el congelamiento de los planes sociales– fueron adoptadas en forma inmediata a partir del cambio de gobierno, lo cual tuvo importantes consecuencias sobre el patrón de crecimiento adoptado por las organizaciones estudiadas en el momento inmediato anterior, como veremos.

Frente a la escalada en la conflictividad social hacia fines de la década, y a medida que el piquete y la demanda de “planes” se afianzaban en las grandes ciudades, particularmente el conurbano bonaerense el número de personas vinculadas a estos programas se fue incrementando. Además, algunas jurisdicciones comenzaron a desarrollar sus propios “programas de empleo bajo la lógica del *workfare*.”³

La lógica de focalización recién fue revisada en 2002, luego del derrumbe económico e institucional de 2001. En este contexto el “Programa Trabajar” fue reemplazado por el “Jefas y Jefes de Hogar Desocupados”. Éste último adjudicó subsidios destinados a desocupados/as pobres, llegando a tener 1.987.875 beneficiarios en abril de 2003 (Centro de Estudios Legales y Sociales –CELS–, 2003). A diferencia de los anteriores programas, éste tenía aspiración de universalidad –esto es, llegar a abarcar a todos los/as “jefes y jefas de hogar desocupados”–, objetivo que nunca se logró. No obstante, más allá de esta diferencia, la propuesta de política era la misma: el otorgamiento de estos subsidios a cambio de la realización de tareas por un total de cuatro horas, a título de “contraprestaciones”. En este caso, además, dichas tareas podían realizarse en los espacios comunitarios (roperos, comedores, copa de leche, apoyo escolar, administración de programas sociales, etc.) de diferentes instituciones sociales, gubernamentales, educativas y religiosas.

La extensión de las políticas sociales no se limitó al aumento de beneficiarios de los “planes sociales”, sino que también se reforzaron los programas de distribución (o producción) de alimentos y otros artículos de primera necesidad, en cuya implementación también participaron los movimientos estudiados, entre los que se destacaron el Fondo Participativo de Inversión Social (FOPAR⁴), PROHUERTA⁵ y el Programa de Emergencia Alimentaria (PEA⁶). Para la gestión de estos programas se impulsó la creación de consejos consultivos locales de políticas sociales, conformados por líderes políticos/as, religiosos/as, territoriales y representantes del MDS y de los municipios⁷

Como hemos señalado en otras oportunidades, la declarada universalidad de los programas y la creación de los consejos consultivos buscaba desplazar a los/as líderes territoriales de la gestión de los recursos, a quienes se pretendía reducir al rol de “intermediarios/as” entre “beneficiarios/as” y “estado” según se señalaba en los spots publicitarios de la época (Cross, 2008). No obstante, los movimientos piqueteros y sus líderes no sólo no fueron desplazados/as del centro de la escena política sino que el período 2002-2003 es considerado en la literatura como el momento de mayor expansión, multiplicación y/o consolidación de los

³ Dentro de nuestros casos de estudios cobra relevancia el “Programa Barrios Bonaerenses”, iniciado en 1996, con el objetivo de atender la problemática de los sectores sociales de menores ingresos y de escasa o nula calificación laboral. El mismo planteaba como contraprestación la ejecución de obras. Estos Los “planes” se distribuyeron mayoritariamente en el conurbano bonaerense (Ministerio de Economía de la Nación, 2001).

⁴ El FOPAR fue destinado en el año 2002 a atender las necesidades alimentarias de la población en situación de pobreza a través del financiamiento de comedores comunitarios. (Fuente: SIEMPRO).

⁵ El programa PROHUERTA se proponía como objetivo mejorar la condición alimentaria de la población rural y urbana en situación de pobreza a través de la autoproducción de alimentos en pequeña escala (huertas y granjas familiares, escolares, comunitarias o institucionales). (Fuente: SIEMPRO.)

⁶ El PEA se proponía distribuir recursos alimentarios directos o monetarios a familias en situación de pobreza, con prioridad aquellas integradas por menores de 18 años, mujeres embarazadas, adultos mayores de 60 años sin jubilación o pensión y personas discapacitadas. (Fuente: SIEMPRO.)

⁷ Estos Concejos fueron creados mediante los decretos del PEN 108/02 y 565/02 con la misión de llevar a cabo “el seguimiento y monitoreo de los Programa Alimentario y Jefes y Jefas de Hogar Desocupados”. El propósito declarado fue la recuperación de la “modalidad de gestión asociada entre el Estado y la sociedad civil” señalándose como “motor central” el impulso de “la participación ciudadana para la incidencia en la toma de decisiones sobre las políticas públicas” (Fuente MDS: <http://www.desarrollosocial.gov.ar/CConsultivos/consultivos.asp>).

movimientos de trabajadores/as desocupados/as (Freytes Frey y Cross, 2005; Merklen, 2004; Svampa, 2005; Quirós, 2006; *et al*).

Pero esta expansión no debe ser interpretada como un reflejo inmediato frente a la mayor disponibilidad de recursos. Las controversias respecto a cómo posicionarse respecto a estos programas fue fuente de importantes debates entre las personas vinculadas a los movimientos. Los testimonios analizados ponen de manifiesto que los “planes sociales” y los programas alimentarios instalaron fuertemente la tensión entre aceptar la *asistencia* estatal y luchar por su *dignidad* (Cross, 2007). Para los movimientos como los que estudiamos que se decidieron por la “aceptación” de los programas sociales, comenzaron entonces nuevos desafíos, como puede verse en estos fragmentos:

Tenemos que llenar las declaraciones juradas, primero las llenamos a mano, después las pasamos a la computadora, armamos la base de datos, y después tenemos que hacer el seguimiento de todos esos compañeros para ver qué compañero se nos cae, la manera de levantar, qué compañero hay que reclamar... Vos te equivocás en uno y tenés que salirla a pelear y un error nuestro sería imperdonable que un compañero quede afuera por algo que hiciste mal... (Referente de la CCC)

Por ahí, nosotros repartimos una cierta cantidad de mercadería que es lo que nos otorga el gobierno nacional y el provincial y por ahí, que sé yo, un mes te entregan tomate y otro mes no te entregan tomate, entonces depende cómo utilicen ese tomate durante ese mes, para que al otro mes les alcance (Referente barrial del MTD- Línea Varela)

Vos ahí tenés que tener cuidado, porque están a la pesca de un error... ponés mal un dedo y podés perder en un escritorio lo que ganaste en la calle (Referente barrial de la FTV)

En estos testimonios se pone de manifiesto no sólo la cantidad de tareas que se realizaban cotidianamente, sino la responsabilidad que asumían frente a eventuales errores que pudieran dejar a sus compañeros/as sin el “plan” que habían “ganado en la “calle”.

El inmenso trabajo realizado por estas/os referentes, muchas veces invisible y subvalorado, resultó indispensable para que los fondos destinados a la asistencia de los/as “desocupados/as pobres” se administrasen eficientemente y llegasen a destino. Cada programa tenía su propia lógica de gestión, requería el llenado de formularios específicos y la presentación en fechas, horarios y oficinas distintas del gobierno nacional, provincial y/o municipal. Asimismo, cada uno de estos programas estaba sujeto a procesos de auditoria y control y definía sus condiciones de implementación.

Usualmente eran los/as referentes quienes asumían el rol principal en la administración de los recursos: primero peleando su “cupó”, es decir lo que correspondía al barrio o sector del barrio que representaban, luego organizando la distribución de la mercadería recibida entre las personas a su cargo; interviniendo en los conflictos generados en torno a la misma (dado que los productos siempre resultan escasos para las necesidades); realizando los trámites para la incorporación de “compañeros/as”; controlando el “cobro” de los planes y solucionando las “bajas”; administrando los fondos para los comedores, etc.

No obstante esta situación, una vez obtenidos los recursos se planteaba el desafío de convertirlos en “herramienta” de organización y movilización. Dirigentes y referentes de todos los movimientos mencionaban que quienes se acercaban a los movimientos lo hacían, en primera instancia, en la búsqueda de solucionar sus necesidades básicas. Entonces: ¿cómo lograr que aquellos/as cuya aspiración era convertirse

en “beneficiarios/as” de la política social, se transformaran en “piqueteros/as”, es decir militantes de las organizaciones?

Para responder a este dilema, los movimientos desarrollaron una serie de prácticas de vinculación. En este artículo vamos a discutir tres de ellas, especialmente ligadas a los modos de relacionarse con la política social: la pugna por la gestión “autónoma” de los “planes” por parte de los movimientos; el establecimiento de criterios específicos para la asignación de los mismos; y el control de los “free-riders”. Tales prácticas - presentes en todos los casos estudiados- estaban orientadas a transformar los recursos “arrancados al estado” en la “lucha” en instrumentos para la organización y la movilización. La importancia de lograr la gestión autónoma de los “planes”, nos fue planteada en estos términos:

Porque nuestras organizaciones piqueteras lo que permanente hicieron fue arrebatarle mediante una lucha frontal contra el gobierno, planes de trabajo. En algunos lugares, las organizaciones lograron el control absoluto de esos planes, lo que significaba por ejemplo que el gobierno no pudiera controlar a su antojo y placer... Porque ¿qué sucedía cuando el gobierno mantenía ese control? Te echaban cuando querían y no tenías derecho al pataleo (Dirigente del PO).

Porque vos obtenías... vos te movías con 100 y obtenías 20 cosas ¿quién distribuía eso? ¿Cómo hacés cuando 100 personas van y se obtiene 20? ¿Quién las recibe? En la tradicional sería por amiguismos, [...] Entonces nosotros ideamos un sistema que tenía varias variables. Primero participación, vos vas a la asamblea 1 punto, vas al corte de ruta 1 punto y así vas haciendo listado. (Dirigente de la CCC)

Como puede observarse en estos testimonios obtener la gestión de los “planes” era un pre requisito indispensable para llevar a cabo el mencionado “trabajo político”. En la medida en que las obligaciones se establecían frente a los/as líderes de la organización era posible, por un lado, sostener el discurso de la “lucha” como modo de apropiación del “plan”, por otro, dar continuidad a las actividades “comunitarias”, particularmente aquellas relacionadas con la gestión de programas sociales.

Asimismo, en la medida en que los/as líderes de los movimientos podían manejar “los cupos” era posible establecer “criterios” de asignación de los planes que reforzaran la posición territorial de las organizaciones. Dichos criterios tendían, invariablemente, a premiar la participación en el trabajo barrial, las asambleas, las marchas y los cortes de ruta, reforzando de esta manera la movilización política. Por otra parte, con el establecimiento de pautas conocidas por todos/as se buscaba diferenciarse de “la corrupción y el amiguismo” que atribuían a los/as “punteros/as”, como representantes de una “política tradicional” cuestionada.

A estos criterios de asignación se sumaban otros, tendientes a evitar que, una vez obtenido el plan social, el/la beneficiario/a no respetara las responsabilidades asumidas. No se trataba sólo de que tomaran lo que se les ofrecía, lo que se esperaba de los/as “compañeros/as” era que “pusieran” su capacidad de hacer, como puede verse en estos fragmentos:

Una cuestión fundamental es que los compañeros entiendan que acá todo se consigue con la lucha, porque no teníamos absolutamente nada y todo lo fuimos consiguiendo con lucha. Acá para conseguir el plan, hay que marchar. Cuando te salió el plan tenés que hacer la contraprestación, ayudar a mantener todo limpio, sabés que tenés que salir a manguear a los negocios si hace falta para el comedor. Y tenés que seguir marchando para que seamos cada vez más. Eso es importante que los compañeros lo entiendan desde el primer día, acá todo se consigue en la calle, nadie te regala nada. (Dirigente FTV)

La enumeración que efectuaba esta dirigente resulta sumamente interesante. Ella situaba en un mismo plano, en tanto “lucha”, actividades como “marchar”, “manguear”, “limpiar”, “hacer la contraprestación”. Como puede verse, movilización y gestión local eran dimensiones de un mismo proceso que pueden ser diferenciadas sólo en el análisis, pero que se presentaban articuladas en la vida cotidiana de las personas

vinculadas a estas organizaciones. Así, al involucrar a los/as “compañeros/as” en estas actividades –en la movilización, pero también en el “manguero” a los comercios de la zona y en las actividades de mantenimiento de los espacios comunes- se reforzaba esta idea de que lo que se conseguía era producto de la “lucha de todos/as”..

En cuanto al control de comportamientos *free riders*, el peso de las vinculaciones personales, "cara a cara", en estos movimientos, había una suerte de "presión moral" que tendía a disuadirlos. No obstante, existían dispositivos de control más formales, tales como planillas de asistencia. Frente a la detección de inasistencias prolongadas, intervenían los/as referentes barriales, para indagar las razones de las mismas (en esto se manifestaba una vez más el peso de las relaciones cercanas en la gestión de la organización).

Finalmente, de las entrevistas se desprende otro tipo de control, que funcionaba más bien como una amenaza velada que como una acción efectiva: el riesgo de perder el plan, de ser dado de "baja". Esta posibilidad estaba estrechamente ligada al grado de control que las organizaciones tenían sobre el manejo de los planes. Si bien oficialmente nunca se les concedió la posibilidad de utilizar el mecanismo "alta por baja", en el período de mayor conflictividad social y de mayor expansión del programa "Jefes y Jefas de Hogar" (años 2002-2003), alcanzaron cierta capacidad de influir en este tipo de decisiones.

Es así que la posibilidad de "resignificar" los programas sociales estatales, convirtiéndolos en vehículo de construcción política, requería un trabajo en dos frentes: por un lado, poniendo de manifiesto una pericia técnica que evitara “perder en un escritorio” lo que se había “ganado en la calle”, por otro dando un “nuevo sentido” a estos recursos en tanto producto de la “lucha” llevando a cabo un “trabajo político” Dicho proceso fue exitoso entre 2001 y 2003 conformando lo que en otro trabajo hemos denominado como una suerte de "círculo virtuoso" (Freytes Frey y Cross, 2007), que permitió el crecimiento y consolidación de los movimientos piqueteros. No obstante, este proceso tuvo lugar en el marco de un modo específico de relación con el estado que si bien permitió su crecimiento y consolidación también creó ámbitos de fuerte dependencia. Los puntos débiles de este proceso de expansión quedaron a la luz ante los cambios que tuvieron lugar en la gestión de la política social desde 2003, los cuales implicaron nuevos desafíos para los/as dirigentes y referentes de estos movimientos.

2 Los desafíos del “giro productivista”: 2003-2007.

Luego de las elecciones presidenciales de 2003, la relación entre el gobierno nacional y los movimientos piqueteros se modificó de varios modos. Si algunos sectores de la oposición pedían la represión de los piquetes y el fin de los planes y la vuelta al trabajo, el presidente electo señalaba en su discurso de toma de posesión del cargo la necesidad de incorporar a esos compañeros a partir “de las políticas económicas y no de las políticas sociales” (Fuente: Presidencia de la Nación)

Si bien en este artículo nos centraremos particularmente en los cambios en la política social, queremos poner de manifiesto que nuestra interpretación es que no se trató de un simple cambio de “enfoque” sino de una reconfiguración del campo de disputa a partir de dos hechos significativos: la masacre de Avellaneda y el fortalecimiento alcanzado por los movimientos bajo la administración Duhalde. En este sentido, resulta

significativo que la “nueva estrategia” del gobierno nos haya sido descrita por varios/as de los/as funcionarios/as entrevistados/as como “ni palos, ni planes”.

El fusilamiento de dos jóvenes vinculados a la Coordinadora Aníbal Verón, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en junio de 2002, llevó a Duhalde a anticipar el llamado a elecciones nacionales. Esto llevó al gobierno de Néstor Kirchner a evitar la represión de los cortes de calles y rutas⁸, aunque tampoco se otorgaron nuevos “planes”, sino que se procedió a una reconfiguración de la política social.

Esta fue caracterizada por sus impulsores/as como portadora de un “enfoque productivista” como alternativa al “enfoque asistencialista” de la etapa anterior. Esto suponía, de acuerdo con los/as funcionarios/as retomar las demandas de los/as líderes piqueteros. Así lo expresaba el secretario de empleo, Enrique Deibe, en una nota periodística:

Todas las organizaciones reivindican el trabajo genuino –dice Deibe–. Pero cuando discutimos con ellos la posibilidad de armar emprendimientos o cooperativas de viviendas, nos responden con insatisfacción ante este tipo de propuestas. Por eso nosotros marcamos que este gobierno está orientado a la generación de empleo y no a la eternización de los planes.” (Enrique Deibe, Página/ 12, 22/07/2004, reportaje de Laura Vales “El Gobierno no quiere la eternización de los planes”)

De acuerdo con Deibe la iniciativa gubernamental recuperaba demandas relacionadas con la “reivindicación del trabajo genuino” a pesar de lo cual estos cambios no fueron bien recibidos. No obstante, planteaba que la decisión política del gobierno era “evitar la eternización de los planes”. Como primera medida en este sentido se pusieron en marcha medidas tendientes a “discontinuar” el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, y a la vez se implementaron programas de “economía social” como el Plan Manos a la Obra, las cooperativas de autoconstrucción de viviendas, de tendido de redes sanitarias, etc. Así nos lo explicaba una de nuestra entrevistadas en el año 2004:

Y respecto al Plan Jefes, se va a dar una mutación interesante. [...] la idea es que el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Social armen un equipo conjunto y revisen 1.700.000 que hoy son beneficiarias del jefes, reactualicen toda la información, cuántos hijos tienen, si siguen casados, si no siguen, como es la historia, si consiguieron trabajo o no. Bueno todo esto que es repasar las condiciones de los beneficiarios. Y lo más importante que se va a hacer esta etapa es identificar los perfiles, cosa que hoy no sabemos [...] A partir de ahí, los que tengan más posibilidades de empleabilidad, serán sujetos de políticas activas de empleo, de capacitación, de formación profesional, terminalidad educativa, intermediación laboral, etc. Y los que tengan menos experiencia laboral y menos perspectivas de empleabilidad - porque ya son personas mayores, porque nunca han trabajado, ni desean trabajar-, pasarán a ser sujetos de políticas sociales. [...] Es decir, van a darse de baja en el Plan Jefes y van a pasar a ser beneficiarias del Plan Familias [...] No hay altas, ni del Plan Familias ni del Plan Jefes. La decisión de presidencia es taxativa: no más planes, por ahora. Ordenemos y con el diagnóstico veamos. (Funcionaria Ministerio de Desarrollo Social de La Nación).

Como queda manifestado en este testimonio, un elemento central para comprender la estrategia gubernamental es que la primera medida adoptada fue el “congelamiento” de la nómina de beneficiarios/as del Jefes y Jefas. Sobre esa nómina “congelada”, se efectuó una revisión de las “condiciones” de quienes conformaban el millón setecientas mil personas vinculadas al programa, para excluir a quienes dejaron de cumplir con los requisitos.

Una vez depurada esa “base” se procedió a la clasificación de los/as “beneficiarios/as” en virtud de su “empleabilidad” y “voluntad de trabajar”. Según consta en el decreto 1506/04, quienes fueron

⁸ No obstante, el abandono de la actitud amenazante por parte de las fuerzas de seguridad, fue acompañado por la juridización de los conflictos (Svampa y Pandolfi, 2004)

considerados/as “empleables” fueron sujetos de políticas del MTESS con el fin de propiciar su inserción en el mercado de trabajo. En el mismo decreto se estableció que el resto, alrededor de un 70%⁹; fueran “transferidos/as” al “Programa Familias por la Inclusión Social”, llamado también “Plan Familias”.

Este programa no prevé “contraprestación laboral” sino la acreditación de que los/as menores de 19 años a cargo del/la titular del beneficio están vacunados/as y escolarizados/as. De acuerdo con las autoridades ministeriales, el objetivo principal de este Plan –como uno de los “pilares” de la nueva política social- fue “reconocer el derecho” de las familias a percibir un ingreso mínimo¹⁰.

Los cambios en la política social incluyeron, asimismo, la implementación de programas destinados a la puesta en marcha de emprendimientos productivos, entre los cuales el “Manos a la Obra” resultó el más difundido. En este marco, el Estado se presentó como un agente “promotor” de empleo.

Este programa fue destinado “prioritariamente a personas, familias y grupos en situación de pobreza, desocupación y/o vulnerabilidad social” bajo la condición de que “conformen experiencias productivas y/o comunitarias”. A diferencia de los programas antes relevados, éste no estuvo dirigido específicamente a beneficiarios/as del Jefes y Jefas, aunque les fue ofrecido como posibilidad para “mejorar sus ingresos desde la economía social” (Fuente: MDS)¹¹

El Plan Manos a la Obra promovía la puesta en marcha de emprendimientos tales como pequeños comercios o talleres para la elaboración de objetos destinados al consumo ¹². Este programa fue presentado como un plan de “economía social” orientado al “desarrollo local” a partir de la generación de empleos “genuinos”. Este planteo recuperaba la demanda por trabajo genuino, propia de la etapa anterior, lo cual llevó a que esta iniciativa fuera muy bien recibida por parte de algunas referentes y dirigentes, como en este testimonio:

Quando salió lo del Manos a la Obra nos metimos nos dieron el subsidio y eso nos ayudó mucho... sabemos que con esto no resolvemos todo los problemas [pero] el presidente [Néstor Kirchner] hoy algunas respuestas nos está dando... (Referente FTV)

Esta referente señala su beneplácito con el programa porque lo considera una “respuesta” del gobierno a sus demandas. Como hemos analizado en otros trabajos, en la FTV como en otros movimientos, la puesta en marcha de emprendimientos productivos fue anterior a los cambios en la política social. En esta búsqueda de generar “trabajo genuino”, los subsidios eran pensados como un modo de fortalecer sus iniciativas. Para otros/as dirigentes, en cambio, este programa antes que una respuesta a sus demandas, constituía una amenaza a la continuidad de los movimientos, como puede verse en estos testimonios:

El tema de los microemprendimientos es para desmovilizar, eso está claro. Los microentrenamientos productivos les digo yo,... Y hoy si hacés un piquete todos te putean y el gobierno dice: pero armá el proyecto si querés trabajo genuino... ¿qué trabajo genuino?” (Dirigente, FTV)

Nosotros decimos "tenemos 100 compañeros que necesitan planes", el gobierno te dice "planes no, pero bueno formen cooperativas y presenten microemprendimientos productivos, o armen un plan de viviendas."[...] bueno

⁹ Al respecto ver: Daniel Arroyo, “Plan Familias: Redefiniciones y nuevos objetivos”, 19 de abril de 2006, Página Web del Ministerio de Desarrollo Social

¹⁰ El adjetivo no es caprichoso. De acuerdo con el Decreto 825/05 que regula este programa, “*las familias beneficiarias pueden seguir recibiendo la asignación del mismo aunque tengan otros ingresos en el hogar, siempre que la totalidad de esos ingresos no supere el Salario Mínimo Vital y Móvil.*” Lo mismo puede leerse como algo “novedoso” en la sección “Preguntas frecuentes” en el sitio destinado a este programa en la página web del Ministerio de Desarrollo Social (<http://www.desarrollosocial.gov.ar/Planes/PF/faq.asp>)

¹¹ <http://www.desarrollosocial.gov.ar/planes/dles/default.asp>

¹² Cfr. Ministerio de Desarrollo Social, <http://www.desarrollosocial.gov.ar/planes/dles>

creemos que hay una decisión estratégica de sacar de la calle a las organizaciones piqueteras, de terminar con las organizaciones piqueteras. Es sólo un problema político, lo que buscan es desmovilizar (Vocero FPDS)

De acuerdo a la interpretación de estos/as líderes, el autodenominado “giro productivista.” buscaba “desmovilizar”. La movilización no sólo constituía en el esquema anterior una forma de “presionar” al Estado para “arrancarle” los “planes” sino también la manera de dar presencia y status político a sus demandas, lo cual resultaba central en la construcción del vínculo en “los/as nuevos/as compañeros/as”.

En este sentido, el dilema que se planteaba no era nuevo. Una vez más se ponía de manifiesto la tensión entre mantener vigente el carácter político de los movimientos en el campo político o convertirse en simples gestores/as de programas sociales. Movilizarse ya no permitía conseguir recursos. Para conseguir nuevos “cupos” debían dedicarse a armar proyectos productivos, lo cual significaba entrar en la lógica de la política gubernamental. Algo bien distinto de “arrancar planes” al gobierno.

Por otra parte, si bien los/as funcionarios/as impulsores/as de la “nueva política social” sostenían que esta recuperaba las demandas de las organizaciones de “trabajo genuino”, algunos/as líderes no compartían este criterio como puede verse en estos testimonios:

Con \$15.000 pretenden que seas solidario y exitoso, que generes empleo y que ganes plata. Y a veces los compañeros nos tenemos que enfrentar a cosas que no tenemos ni idea, ¿qué se yo lo que es un presupuesto? [...] Antes a lo sumo un día se te quemaba la comida del comedor, o alguien se olvidaba de apagar una luz cuando cerraba el galpón, pero eso no implicaba que cobrabas menos del plan o que el plan se te caía...Encima después te llevás dos mangos, te peleaste con todo el mundo, no tenés jubilación, no tenés obra social, si te fundís es culpa tuya (Dirigente FTV)

Ahora estamos montando una cooperativa textil, nuestros compañeros no son precisamente los más calificados, son gente que ha trabajado en algún taller, en algún momento de su vida.... con la historia de 20.000 laburos que tenemos todos.... pero en cuanto a calificación están en 2do. nivel, [...] yo ayer, sin ir más lejos, estuve todo el día en un curso de Corte y Confección. (Dirigente CCC)

Como se observa en estos testimonios, no sólo las expectativas respecto a la calidad del empleo y los ingresos a obtener eran escasas. La gestión de emprendimientos productivos impuso desafíos en ámbitos en los cuáles muchas de estas personas no se sentían competentes. Algunos fueron de índole técnica –como las de planificación, gestión de la producción, comercialización, etc.- y otras están directamente relacionadas con las exigencias del modelo productivo de la “economía social” –lidiar con los conflictos entre compañeros/as, adquirir una práctica de establecimiento de acuerdos que reemplace los mecanismo disciplinares tradicionales, etc. En este contexto, considerando los magros ingresos obtenidos a cambio de asumir tantas responsabilidades y el hecho de que otros beneficios asociados tradicionalmente al trabajo (como la seguridad social o las vacaciones pagas) estuvieran ausentes, llevaron a muchos/as dirigentes y referentes a considerar que estos programas constituían respuesta ineficaz frente las demandas de “trabajo genuino”.

Asimismo, la política social presentó otros desafíos producto de sus propias contradicciones. Como hemos visto, una de las estrategias de “discontinuidad” del Jefes y Jefas de Hogar fue la transferencia de los/as “empleables” a programas de reinserción laboral. Esta situación debilitó las capacidades de gestión y de trabajo de las organizaciones, como puede verse en estos testimonios:

Los más especializados están todos trabajando o en la capacitación del gobierno, eso hace que los dirigentes tengamos que meternos en todo: estudios de costos, de mercado, de productos, de las máquinas para elaborarlos, los lugares.... y eso te roba mucho tiempo... (Dirigente CCC)

Mirá, fijate lo que hace el capitalismo, el estado capitalista: lo llaman y le dicen: “nosotros le damos ochocientos pesos para una capacitación laboral para veinticuatro meses, y después sueldo de mil doscientos por mes”. Entonces eso crea una ruptura: la mitad van a la lucha y la otra mitad se queda.” (Referente Barrial, PO)

En estos testimonios se observa las dificultades a las que se enfrentan los/as líderes para retener a las personas que se habían vinculado en la etapa anterior. Por un lado, no se podía privar a un/a “compañero/a” de la posibilidad de buscar mejores condiciones de vida y trabajo que las que se ofrecía trabajar en algún emprendimiento. Por otro, la pérdida que significa para el movimiento la salida de estos/as “compañeros/as” que por sus características –ser jóvenes, tener experiencia laboral, deseos de trabajar- hubieran podido aportar en gran medida al sostenimiento de los emprendimientos productivos gestionados por los movimientos.

En este marco, los cambios en la política social habrían desafiado a los movimientos en más de un sentido. En términos de sostener su visibilidad pública, en relación a asumir nuevas gestiones y responsabilidades que muchas veces excedían la capacidad técnica de las personas que los conformaban, personas que muchas veces pertenecían al sector más “vulnerable” en una población de por sí debilitada por la marginación y el desempleo.

Las cuestiones antes mencionadas preocupaban particularmente a los/as dirigentes, aunque muchos/as referentes se plantean cuestiones similares. Pero sin dudas, lo que constituía una preocupación mayor en estos/as últimos/as fue el sostenimiento de las actividades comunitarias. En este sentido, se observa que uno de los principales desafíos a los que dio lugar la política social “productivista” fue el de compatibilizar los criterios de “sustentabilidad económica” de los emprendimientos, con el sostenimiento de las mencionadas actividades que en la etapa anterior organizaban la vida cotidiana en los barrios. Así nos fue contado:

Nosotros en el barrio somos muy... siempre pensamos en trabajo y organizamos micro emprendimientos y en cosas que después es muy difícil sostener todo eso en el tiempo. Y es una carga donde de última a veces termina haciéndose cargo uno. Que sé yo, hoy cocinamos para comer temprano para ir al puente y empecé a garantizarlo yo, empecé a cortar las cebollas... y todo bien, en realidad está todo bien, no me molesta, pero es como que estás tuc, tuc, tuc (Referente MTD-Línea Varela)

O sea, si nos vamos todos a laburar en el emprendimiento social, ¿quién va a atender el comedor? (Referente FTV).

Las preocupaciones manifestadas por estas dos referentes barriales se encuentran ampliamente difundidas y se relacionan directamente con los cambios en la política social. Como vimos, las “contraprestaciones” exigidas por el Plan Jefes y Jefas de Hogar eran compatibles con la realización de estas actividades. Esto generó problemas en términos de sostener y afianzar la presencia de los movimientos en “los barrios”. En efecto, en un contexto en que los niveles de pobreza han seguido siendo muy elevados, no resulta viable desde el punto de vista político abandonar actividades que, como los comedores infantiles, los roperos, la distribución de los alimentos entregados por los programas sociales, formaban parte de la vida cotidiana de muchas familias y constituían, casi siempre, la primera instancia de acercamiento de los/as “compañeros/as”.

Por otra parte la lógica del Programa Familias reforzó esta situación al confinar a las participantes con varios/as hijos/as a cargo a su rol materno. Como hemos visto el Familias no exigía una contraprestación laboral en actividades comunitarias. Esto generó, por un lado, que muchas referentes sintieran que se desconocían las capacidades de gestión desarrolladas y practicadas en la etapa anterior. Asimismo, significa un obstáculo para “retener” a muchas participantes. Así lo manifestaba una de nuestras entrevistadas:

El Familias te manda de vuelta a tu casa... y yo me la pasé 30 años adentro de mi casa y si ahora tengo que volver me siento asfixiada. Yo me puedo ocupar de vacunar a mi hijo y también del comedor... No sé que se creen. A mi no me importa por mí, porque nadie me va a impedir que me siga ocupando de las cosas de acá, pero por ahí otras compañeras se van a ir... Además si a mi no me hubieran obligado a salir de las 4 paredes de mi casa, todavía estaría ahí y pienso que la contraprestación era una cosa positiva para sacar a la mujer de su casa, de las ollas, del marido... Y también al desocupado, que por lo menos se tenía que vestir y peinar para ir a hacer la contraprestación, no estar todo el día tirado en la cama... Al final parece que te quieren incentivar la chatura, la vagancia, no sé,” (Referente barrial FTV)

Como se ve en este testimonio para esta referente (y muchas otras) el Plan Familias contenía en su diseño ciertos prejuicios acerca de las capacidades de las mujeres, como si no pudieran ocuparse de sus actividades comunitarias y de sus responsabilidades maternas al mismo tiempo. A su vez, generó dificultades para retener a algunas “compañeras”.

Por otra parte, el proceso de valorización de las actividades comunitarias como forma de “salir” de “la casa, de las ollas, del marido” que aparece frecuentemente en estas mujeres (Freytes Frey y Crivelli, 2007) no es tenido en cuenta en este esquema. La imposición de la contraprestación permitía que muchas mujeres pudieran “salir” de su casa, en tanto obligación impuesta por el “plan” que solía ser el único ingreso monetario fijo en los hogares (Cross y Partenio, 2005). En este marco, muchas mujeres pudieron sortear el confinamiento a las actividades domésticas que se les imponía por tradición o por imposición explícita de los varones de las familias. Nuestra entrevistada entendía que al no exigirse una contraprestación muchas mujeres podrían verse privadas de esta posibilidad.

No obstante, ella iba mucho más allá. Resaltaba que aún para los “desocupados” (varones) el hecho de tener que cumplir un horario era importante en términos de organizar su cotidianeidad, ya que “no podían pasarse todo el día en la cama”.

De esta forma hemos visto hasta que punto la puesta en marcha los cambios en la política social ha generado nuevos desafíos a los movimientos tanto en relación con su modo de inserción en el campo político, particularmente en la interacción con el estado como en el modo de organizar las actividades cotidianas en los “barrios”.

Como hemos visto la movilización dejó de ser una herramienta eficaz para conseguir recursos. El modo establecido de acceso a estos recursos pasó a depender de su capacidad técnica para presentar y gestionar proyectos productivos. Asimismo, el sostenimiento de las actividades comunitarias, que constituían la base de la acción territorial de los movimientos, resultó ser una de las estrategias políticas más afectadas por el nuevo esquema. Por un lado, en tanto las personas afectadas a programas de capacitación o a la gestión de emprendimientos no podrían, independientemente de su voluntad, dedicarse a estas actividades como actividad principal. Por otro, porque a aquellas personas declaradas “inempleables”, por atributos como su condición de género o la cantidad de hijos/as cargo, que en nada contemplan la capacidad de gestión

manifestada a lo largo de los años, se les ofreció un esquema de asistencia que las confina a su espacio doméstico y al cuidado de los/as menores a su cargo. En lo que sigue reflexionaremos en torno a las implicancias teóricas y políticas de este proceso.

3 Reflexiones finales y aperturas.

Como hemos señalado al comienzo de este artículo, consideramos que la configuración de la política social puede entenderse como una cristalización provisoria de las relaciones de fuerza del campo político. Consideramos que esto quedó evidenciado a lo largo de estas páginas.

Como vimos, la batería de programas sociales que se puso en marcha en 2002, entre los cuales el Jefes y Jefas de Hogar Desocupados fue el más destacado, puso de manifiesto, por un lado, la receptividad social de las demandas piqueteras, a la vez que constituyó un intento –fallido- de restituir una relación directa entre gobierno y beneficiarios/as, con prescindencia de los movimientos.

Lejos de ello, se inauguró un proceso de fortalecimiento y expansión de estos procesos dada la centralidad que adquirieron. De hecho, la implementación de estos programas descansó en las densas redes comunitarias y organizativas de los movimientos¹³, las cuales debieron ser reconfiguradas para lidiar con las obligaciones administrativas que impuso la gestión de estas diversas políticas, pero también para poder transformar estos recursos en “herramientas” de movilización. Asimismo, la conformación de Consejos Consultivos y delegaciones locales del MTESS y MDS dieron una muestra de la reconfiguración que sufrió el Estado en este proceso (Manzano, 2003).

De este modo, hemos visto que si hasta 2003 la gestión cotidiana de los programas sociales sujetaba a los/as “beneficiarios/as” a ese rol, la construcción de un discurso épico que relacionaba “planes” y “lucha” en las calles desafió la pasividad asociada a este status. A su vez, si los movimientos debieron adaptar sus estructuras y capacidades a la gestión de los programas, las agencias gubernamentales debieron habilitar y espacios y procedimientos que dieran cuenta de esta gestión compartida. En esta tensión se configuraron ciertas prácticas específicas que orientaron la gestión de demandas y recursos y regularon la vida cotidiana en los “barrios”.

Esta situación no puede ni debe pensarse como exenta de conflictos y fuertes contradicciones. De hecho, el fin de la gestión Duhalde estuvo marcado por la masacre de Avellaneda, la cual puso de manifiesto la dualidad de la estrategia gubernamental y la profundidad de las tensiones vigentes. El fuerte repudio social hacia el fusilamiento de estos jóvenes y al intento de aparentar un enfrentamiento entre ambos, puso de manifiesto los límites de un esquema represivo de contención del conflicto social.

En la campaña presidencial, se puso de manifiesto que la demanda de trabajo genuino fue retomada por distintos sectores en sentidos diversos, e incluso contradictorios, pero había sido incorporada a la agenda política como una demanda legítima y urgente. De hecho, una de las primeras medidas del presidente electo fue la presentación de la “nueva política social”, a la que hizo referencia desde el discurso con que inauguró su gestión.

¹³ Como hemos señalado en otros trabajos, estas redes, a su vez, habían sido conformadas en procesos previos de movilización, como por ejemplo, las tomas de tierra de los años 80 en La Matanza (Cross, 2007).

Como vimos, el autodenominado enfoque “productivista” retomó, en parte, el discurso de los/as líderes piqueteros que habían planteado la necesidad de trascender el “asistencialismo” generando “trabajo genuino”. Pero, como vimos, también trajo aparejado toda una serie de desafíos que de alguna forma pusieron en cuestión tanto las capacidades de gestión local desarrolladas en las etapas previas como el significado político de los movimientos.

En relación con el primer aspecto, vimos hasta que punto el enfoque “productivista” generó dificultades en torno al sostenimiento de las actividades comunitarias y a la forma de emprender actividades económicamente sustentables sin abandonar la “lucha” política. En este sentido, pusimos de manifiesto que en estos pasajes de “beneficiarios/as” a “piqueteros/as” y de “piqueteros/as” a “emprendedores/as” se expresa una pugna por el sentido de la acción desarrollada por los movimientos. En ella se define el alcance de la transformación social que las organizaciones pretenden –cada una desde su perspectiva- alcanzar.

Por eso, y en virtud de lo analizado, es que sostenemos la importancia de pensar a la política social no sólo como “respuesta” o “acción estatal” sino como el sustrato en el que se plasman las relaciones de fuerza del campo político. Este enfoque nos permite a un tiempo situar históricamente los procesos de definición de los modos de intervención estatal y los posicionamientos políticos de líderes sociales, comprendiendo su complejidad e incorporando a los relatos macro aquellas prácticas que constituyen la vida cotidiana de las personas.

Referencias Bibliográficas:

- Auyero, Javier (2000): "Cultura política, destitución social y clientelismo político en Buenos Aires" en Svampa, Maristella (ed.) *Desde Abajo: La transformación de las identidades sociales*, Biblos, Buenos Aires
- Barbier Jean.-Claude (1996): "Comparer workfare et insertion?", *Revue française des affaires sociales*, N°4, pp. 7 - 27
- Centro de Estudios Legales y Sociales (2003): "Plan Jefes y Jefas ¿Derecho social o beneficio sin derechos?", Resumen Ejecutivo, CELS, Buenos Aires, mayo de 2003.
- Cross, Cecilia (2007): "Los procesos de organización colectiva y la construcción de las demandas: Reflexiones a partir del estudio de una organización piquetera en el período 2002-2005" en *Revista Runa*, N° 27, Buenos Aires, (en prensa)
- Cross, Cecilia (2008): "Luchas, prácticas asociativas y procesos de vinculación política en la zona metropolitana de Buenos Aires. Estudio de casos en cinco organizaciones territoriales vinculadas a la FTV.", Tesis de Doctorado, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.
- Cross, Cecilia y Partenio, Florencia (2005): "La construcción y significación de los espacios de mujeres dentro de las organizaciones de desocupados" En *Encuentro Mujeres y Globalización* Centro para la Justicia Global S Miguel Allende -Guanajuato 2005. http://www.globaljusticecenter.org/ponencias2005/cross_esp.htm. Fecha última consulta: 17 de marzo 2009
- Freytes Frey, Ada y Crivelli, Karina (2007): "Women's Participation in Argentina's Picketing Movement: Accomplishments and Limitations in the Redefinition of Feminine Roles" en *Journal of Developing Societies*, Vol. 23, pp. 243-258
- Freytes Frey, Ada y Cross, Cecilia (2005): "Políticas Sociales y Tradiciones Ideológicas en la constitución de los movimientos de trabajadores desocupados" En 7° Congreso Nacional de Estudios del Trabajo Buenos Aires, 2005. Publicado en CD. Disponible en: <http://www.aset.org.ar/7congreso.htm>. Fecha última consulta. 15 de marzo de 2009.
- Freytes Frey, Ada y Cross, Cecilia (2007): "Los movimientos piqueteros como espacio de construcción de competencia política y desafío a la democracia neoliberal en Argentina. Un estudio sobre cuatro organizaciones en el período 2002-2004.", En *Revista Latitudo*, N° 1, Vol. 1, Págs. 81-100.
- Glaser, Barney y Strauss, Anselm (1967): *The discovery of grounded theory. Strategies for qualitative research*. Aldine Publishing Company, Nueva York.
- Grassi, Estela (2004): "Problemas de la teoría, problemas de la política. Necesidades sociales y estrategias de política social". En: *Laboratorio/n line*, N° 16 Disponible en: http://www.catedras.fsoc.uba.ar/salvia/lavbo/textos/16_4.htm Fecha última consulta: 18 de marzo de 2009
- Manzano, Virginia (2003): "Piqueteros y Beneficiarios: Modalidades de acción sociopolítica y proceso de construcción identitaria", *VI Congreso Nacional de Especialistas en Estudios del Trabajo*, ASET, agosto, Buenos Aires.
- Merklen, Denis (2004): "Sobre la base territorial de la movilización popular y sobre sus huellas en la acción" en *Revista Laboratorio/nline*, N° 16, Buenos Aires Disponible en: http://www.catedras.fsoc.uba.ar/salvia/lavbo/textos/16_2.htm Fecha última consulta: 16 de marzo de 2009.

Quirós, Julieta (2006): *Cruzando la Sarmiento. Una etnografía sobre piqueteros en la trama social del sur del Gran Buenos Aires*, Buenos Aires: Antropofagia

Svampa, Maristella (2005): *La Sociedad Excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo*, Buenos Aires: Taurus.

Svampa, Maristella y Pandolfi, Claudio (2004): “Las vías de la criminalización de la protesta en Argentina 1” OSAL, N°14, Disponible en <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal14/D14Svampa-Pandolfi.pdf> Fecha última consulta 18 de marzo de 2009

Svampa, Maristella y Pereyra, Sebastián (2003): *Entre la Ruta y el Barrio: La experiencia de las organizaciones piqueteras*, Buenos Aires: Biblos